



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

EXPTE. 48325/2022

“FOOD CORNER SA c/ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS s/IMPUGNACION DE DEUDA”

Sentencia Definitiva

En la Ciudad de Buenos Aires, reunidos los Señores Magistrados integrantes de la Sala Segunda de la Excma. Cámara Federal de la Seguridad Social para dictar pronunciamiento en la presente causa, se procede a emitir el voto en el siguiente orden:

LA DOCTORA NORA CARMEN DORADO DIJO:

En autos la empresa FOOD CORNER SA cuestiona la Resolución Administrativa 1891-E-2021 notificada el 04/05/22 en cuanto, al rechazar una anterior impugnación, reclama el pago de una deuda, por los periodos fiscales 08/2016 a 09/2017 más intereses y multas, atento considerar una errónea aplicación de la alícuota del 17% para el cálculo de las contribuciones patronales previstas en el inciso b) del artículo 2do del Decreto 814/2001 en lugar de aplicar el inciso a) de la mencionada norma, conforme las ganancias obtenidas que, según sostiene el organismo fiscal, habrían superado el límite de ventas previsto por el decreto 1009/01 por el periodo cuestionado.

Ante la exigencia impuesta por el artículo 15 de la ley 18.820, a fin de posibilitar la apertura de la presente instancia judicial, la impugnante refiere la imposibilidad efectiva de dar cumplimiento a dicho pago que asciende a \$ 5.955.126,23, por lo elevado del mismo con respecto a su concreta capacidad económica.

Al efecto de lograr el acceso a esta jurisdicción acompaña un seguro de caución por la suma de \$ 6.000.000 extendido por ACG Aseguradora de Créditos y Garantías SA, póliza de caución digital N° 1543093.

Entiendo prudente proceder a la apertura de la presente instancia pues si bien nuestro Máximo Tribunal de Justicia ha considerado la regla “solve et repete” congruente con las garantías constitucionales que emanan del artículo 18 de la Constitución Nacional y art. 8° del Pacto de San José de Costa Rica, tal imperativo legal ha sido atenuado, entre otros supuestos, en aquellos casos en que su pago puede afectar la concreta capacidad económica del justiciable (CSJN 21/12/89, “Micrómnibus Barrancas de Belgrano” Fallos 312:2490; 11/06/98 “Cadesu Cooperativa de Trabajo Ltda. c/DGI” Fallos 312:1741; 02/08/05 “Centro Diagnostico de Virus SRL c/AFIP” Fallos 328:2938), llegando a aceptar la presentación de un seguro de caución como sucedáneo válido del depósito exigido





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

por el artículo 15 de la ley 18.820 (conf. “Orígenes AFJP SA c/AFIP” Fallos 331:2480) a fin de salvaguardar el debido derecho de defensa en juicio.

La lectura de la causa revela que en su memorial de agravios la impugnante expresa que FOOD CORNER es una sociedad anónima ubicada en Rosario, Provincia de Santa Fe que presta servicios de expendio de bebidas y comidas en establecimientos con servicio de mesa y/o mostrador. Durante los periodos fiscales objeto de estas actuaciones presentó sus declaraciones juradas y abonó las obligaciones correspondientes a la seguridad social de conformidad con el derecho aplicable sin incurrir en omisión alguna. Rechaza la pretensión fiscal pues entiende que se encuentra excluida del inciso a) del artículo 2° del Decreto 814/01 al resultar tutelada por el régimen de la ley 24.467. Relata la impugnante que jamás superó los topes establecidos para su actividad conforme las sucesivas resoluciones dictadas por la autoridad de aplicación tales como Res. SEPyME 24/01, 11/16, 103-E-2017, vigentes durante los periodos reclamados. Remite al respecto a prueba documental acompañada en sede administrativas acreditativa de tales extremos. También cuestiona la imposición de multa pues entiende que en ningún momento se ha configurado la comisión de un delito penal (adulteración de datos, estafa). Por último, impugna la aplicación de intereses por entender que al no existir deuda, pues en su opinión siempre cumplió con las exigencias legales vigentes, tampoco puede AFIP reclamarle intereses dado el carácter accesorio de los mismos.

Por su parte el organismo solicita se rechacen los argumentos de la quejosa.

Explica que en la causa que nos ocupa se ha respetado el derecho a ser oído, a ofrecer y producir prueba y ha recaído una decisión fundada. Los cargos efectuados tuvieron su origen al comprobar que las ventas totales anuales de FOOD CORNER SA la colocan dentro de los empleadores previstos en el inciso a) del artículo 2° del Decreto 814/01 y no en el inciso b) como pretende, por lo que la intimación cursada resulta ajustada a derecho, debiendo rechazarse los agravios vertidos pues el apelante, en su opinión, no logró demostrar la improcedencia del reclamo efectuado. Con respecto a la multa impuesta expresa que las actas de inspección dan origen a las correspondientes actas de infracción, no constituyendo un requisito indagar acerca de la intención con que se llevó a cabo la conducta infraccionada dado que el mero incumplimiento habilita la imposición de sanciones independientemente de la intencionalidad o no del empleador.

Entiendo que no asiste razón al impugnante.

Sobre el tema ya he fijado mi posición como vocal preopinante al pronunciarme en la sentencia definitiva 150.132 del 19 de febrero de 2013 recaída

Fecha de firma: 03/05/2023

Firmado por: WALTER FABIAN CARNOTA, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA CARMEN DORADO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI, SECRETARIA DE CAMARA



#37143324#357960729#20230419131616283



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

en los autos “Granja Dos Cuñados SA c/AFIP” que he reiterado al votar la causa “Arpenta Cambios SA c/AFIP” sent. del 17/03/17.

En efecto, la ley 24.476 creó un régimen jurídico especial tendiente a promover el crecimiento y desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, considerando como tales a aquellas cuyo plantel no supere los cuarenta trabajadores y tengan una facturación anual inferior a la cantidad que para cada actividad fije un organismo administrativo -Comisión Especial de Seguimiento- que sería el encargado de evaluar el impacto que, sobre las relaciones de trabajo, tuviera la creación de un régimen laboral especial en la materia (arts.83 y 105, ley citada).

De lo expuesto surge que la noción de pequeña y mediana empresa es fluctuante al menos en materia económica pues, aunque la empresa no llegue a superar los cuarenta trabajadores bien podría ser considerada una gran empresa cuando su facturación anual supere cierto monto, lo que revelaría su potencialidad económica.

Con posterioridad se sancionó la ley 25.300 –ley de fomento para la micro, pequeña y mediana empresa- cuyo objetivo sería el fortalecimiento competitivo de dichas entidades aclarándose que la autoridad de aplicación será la que definirá las características de las empresas para ser tipificadas como: micro, pequeña o mediana aclarando que, entre sus tareas está la de revisar anualmente la definición de micro pequeña y mediana empresa a fin de actualizar las parámetros y especificidades contempladas en la definición adoptada (ver art. 1º, ley citada) que no sería otra que la establecida por el art. 83 de la ley 24.467.

En cumplimiento de los fines establecidos por la ley 24.467 se dictó el decreto 943/97 que creó la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa como autoridad de aplicación de la ley 24.467 y es, dicha autoridad, la que determinó que empresas serían consideradas micro, pequeñas o medianas tomando como referencia que las ventas totales anuales no superaran ciertos valores que eran diferenciados según se trate de empresas de construcción, servicios, comercio, industria y minería y agropecuario.

El art. 2º del Decreto 814/2001 establece una alícuota del 21% para los empleadores cuya actividad principal sea la locación y/o prestación de servicios con excepción de los comprendidos en las leyes 23.551, 23.660, 23.661 y 24.467 y uno sustancialmente menor para los restantes empleadores no comprendidos en el inciso anterior, esto es los empleadores considerados titulares de una pequeña o mediana empresa, siendo dicha resolución afectada por la sanción de la ley 25.453 que redujo la alícuota al 20%.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

Cabe destacar que las anteriores directivas no tienen un carácter absoluto pues por la propia ley 25.414 que declaró la emergencia pública se facultó al Poder Ejecutivo a eliminar exenciones en materia fiscal y/o contributiva y por ello se dictó el decreto 1.009/2001 estableciendo que las pequeñas y medianas empresas estarían comprendidas en los términos del art. 2º inciso a) del decreto 814/2001 en la medida que sus ventas totales anuales superen los 48.000.000 millones de pesos que es, precisamente, lo que sucede con el apelante.

Como ya expresara la definición de pequeña y mediana empresa es mutable en nuestro ordenamiento jurídico y la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa tiene facultades para tipificar que entidades productivas entran en dicha tipología o no, exclusivamente a los fines laborales (art. 83 ley 24.467) pero no fiscales y/o contributivos, debiendo prevalecer directivas como las derivadas de la ley 25414 que es un cuerpo normativo de emergencia pública.

La empresa ofrece prueba pericial contable a fin de confirmar los volúmenes de facturación durante los periodos que son objeto de controversia.

La apelante insiste en que existen sobradas razones para interpretar la legislación de la manera en que lo hizo, pues afirma que el decreto 814/01 es una norma modificada o complementada por otras normas y que su parte liquidó las contribuciones patronales según pautas cuantitativas de facturación anual establecidas por diversas resoluciones que sucedieron a la original Resolución N° 24/01 (SEPyME) actualizándola correspondientes al periodo del cargo y consecuentemente la subsunción de su situación en las mismas a efecto de quedar comprendida en el beneficio de reducción de contribuciones patronales conforme lo prevé el decreto 814/2001 artículo 2º inciso b.

Por lo anterior insiste en que debe dejarse sin efecto la determinación de deuda aplicada dado que los montos que surgen de su documentación contable quedan comprendidos dentro de las cifras contenidas en las distintas resoluciones que actualizan la original Resolución 24/01 SEPyME, así como la Res. 11/26, y la Res. 103-E-2017 para los distintos periodos reclamados.

Cabe aclarar que los decretos 814/01 y 1009/01 así como el artículo 173 de la ley 27430, fueron derogados por la ley 27.541, la cual en su capítulo tercero bajo el título “Seguridad Social. Contribuciones Patronales”, estableció un nuevo régimen de alícuotas. Esta modificación, si bien no abarca el periodo reclamado (08/2016 a 09/2017), deberá tenerse en cuenta para periodos posteriores.

Por último, solicita se la exima del pago de la multa pretendida, así como de los intereses resarcitorios impuestos pues, según entiende, para la aplicación de una multa es necesario que se acredite el acontecimiento de un hecho antijurídico, extremo que en el caso no aconteció. Es más, según refiere, su conducta no puede





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

ser tachada ni de culpable ni negligente pues su parte efectuó el cálculo de las contribuciones patronales conforme lo indica la normativa que entiende aplicable, ingresándolas en su totalidad en tiempo y forma.

No puedo compartir tal aseveración dado que en lo atinente al cumplimiento de las exigencias de seguridad social el mero incumplimiento genera la consiguiente responsabilidad y sanción sin que tenga cabida el elemento subjetivo (ver esta Sala sent. del 19/10/98 “Pilot Pen SA”), y no encuentro en la causa elementos suficientes que justifiquen apartarme de la decisión administrativa que se recurre.

Con respecto a los intereses resarcitorios aplicados, cabe recordar que los mismos responden a una imposición legal (art.37 de la Ley 11.683) e importan una necesaria consecuencia por el atraso del deudor en el pago de una obligación pecuniaria o parte de ella, correspondiendo los mismos desde el vencimiento de la obligación y hasta su efectivo pago por lo que tampoco puede accederse a lo peticionado.

Por ultimo y con relación a los honorarios, teniendo en cuenta la calidad de la labor realizada, la facultad que otorga al magistrado el artículo 1255 del C.C. y Ccial de la Nación, se establecen los honorarios de representación letrada de la parte demandada y de la parte actora en 15 UMA (\$ 223.995) y 10 UMA (\$149.330) respectivamente, CSJN. Ac. 09/2023.

En definitiva, propongo declarar habilitada la presente instancia judicial, confirmar la resolución recurrida, imponer las costas a la vencida (art. 68 CPCCN), regular los honorarios de representación letrada de la parte demandada en 15 UMA (\$ 223.995) y 10 UMA (\$ 149.330) en favor de la representación letrada de la parte actora (CSJN. Ac.09/2023).

EL DOCTOR JUAN FANTINI ALBARENQUE DIJO:

Disiento con el voto de mi distinguida colega de Sala, por los argumentos que a continuación expondré.

Visto las actuaciones administrativas, corresponde hacer la siguiente evaluación: el beneficio de reducción de porcentaje de contribuciones patronales derivados del Decreto 814/01 se complementa con el Decreto 1009/01 que estableció la definición de PyMES, por remisión a la Resolución N° 24/2001, que a través de su art. 1° dispuso que serían consideradas micro, pequeñas y medianas empresas aquellas cuyas ventas totales expresadas en pesos no superen los valores por ella establecidos. Dichos montos, a posteriori, fueron actualizados en virtud de la Resolución 675/02 de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

A su vez la Resolución 21/2010 en su artículo 1, señala a los efectos los importes de ventas para establecer como serán consideradas Micro Pequeñas y Medianas Empresas, un cuadro por sector. Situación que se reitera en las sucesivas Resoluciones dictadas.

En tanto el fundamento para elevar el tope fue la devaluación acaecida en nuestro país en diciembre de 2001, como es de público conocimiento, surge que el organismo actuante debió actualizar la R.G. 1095 en similar medida para adecuarla a una nueva definición cuantitativa de PyME pero no invocar una norma desactualizada para quitar el beneficio a empresas encuadradas como PyMES en la actividad comercial. Situación que por otra parte se continúa en sucesivos periodos posteriores.

En virtud de lo anterior, entiendo que el encuadramiento como PyME quedará esclarecido si la facturación arroja un monto inferior al límite fijado por las Resoluciones 675/2002, 147/2006; 21/2010; 50/2013, 357/2015 , 11/2016 , 103/2017,154/2018 220/2019 y mod, que correspondan a los periodos de cargo y con ello la tipificación de su situación para encontrarse alcanzada por el beneficio de reducción de contribuciones patronales derivado del Decreto 814/2001, art. 2 inc. B.

Lo antes expresado viene a coincidir con el criterio adoptado por la jurisprudencia de esta Cámara (ver Sala I Expte 99680/2012/1/RH1 “Cooperativa Eléctrica Lujanense Ltda c/ Administración Federal de Ingresos Públicos”, Sala II Expte 19649/2020; “Guardián SRL c/ AFIP S/ Impugnación de Deuda” sentencia del 14/11/2022, Sala III SD.125.281 del 11/05/09; “Codimat SA c/AFIP-DGI s/Impugnación de deuda” y dictamen N° 25486/09 del Sr. Representante del Ministerio Público a cargo de la Fiscalía N° 2, y recientemente la CSJN en Expte CSS 93739/2011/1/RH1 y Otros SOS SA c/ Administración Federal de Ingresos Públicos” sentencia del 12 de diciembre de 2017, dejó firme por aplicación del art. 280 CPCCN el criterio aquí propuesto).

Cabe señalar que el Decreto 814/2001 fue reformado por la ley 27430. Asimismo, la Ley 27541 vigente desde el 23 de diciembre de 2019 introdujo una serie de modificaciones con respecto al cálculo y liquidación de las contribuciones patronales mediante la derogación del Dto. 814/01, Dto. 1009/01 y el Art. 173 de la Ley 27430.

Ello así el análisis efectuado en estos actuados se acota a los períodos de cargo. En consecuencia propongo la revocación de la resolución recurrida, haciendo lugar a la apelación interpuesta por FOOD CORNER S.A., por no haber superado la misma los topes establecidos para su actividad por las sucesivas





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

resoluciones anteriormente citadas, respecto a los períodos objeto del presente recurso.

Dada la forma en la que se vota, deviene abstracto pronunciarse sobre el resto de los agravios.

En cuanto a las costas, propongo imponerlas al organismo, conforme art. 68 del C.P.C.C.N. y criterio del Alto Tribunal en los autos Cooperativa Eléctrica Azul Ltda. c/ Administración Federal de Ingresos Públicos CD.G.I.C; con fecha 5 de octubre de 2004, oportunidad en que el Tribunal modificó la doctrina de Fallos: 323:1557.

En cuanto a la regulación de los honorarios, corresponde al juzgador analizar la labor desarrollada por el profesional, tomando para ello en cuenta no sólo los montos cuestionados, sino también la complejidad de la materia debatida, la eficacia de las tareas y la extensión de los trabajos llevados a cabo por los letrados.

“La regulación no depende exclusivamente del monto del juicio o de las escalas pertinentes, sino de todo un conjunto de pautas previstas en los regímenes respectivos, que pueden ser evaluadas por los jueces con un amplio margen de discrecionalidad, entre las que se encuentran la naturaleza y complejidad del asunto, el mérito de la causa, la calidad, eficacia y la extensión del trabajo (voto del Dr. Carlos S. Fayt) (CSJN T. 315 , P. 1620).

En consecuencia, se tomará en cuenta la labor desarrollada por el letrado, la calidad, eficacia e importancia económica del proceso (Conf. Doctrina art. 1255 CCyCN y lo establecido por el Alto Tribunal en Establecimiento Las Marías S.A.C.I.F.A.c/Misiones, Provincia de s/ acción, declarativa. Sent. Del 4 de septiembre de 2018).

Se propicia regular los honorarios de la dirección letrada de la parte actora en 76 UMA, equivalente a \$ 1.134.908 (valor UMA \$ 14.933 conf. Acordada 09/2023). Respecto a los honorarios de la dirección letrada de la demandada resulta aplicable lo dispuesto por el art. 2 Ley 27.423.

Por lo señalado, propicio: Revocar la resolución impugnada con el alcance indicado. Imponer las costas al organismo (art. 68 CPCCN). Regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora en 76 UMA, equivalente a \$ 1.134.908 (valor UMA \$ 14.933 conf. Acordada 09/2023), importe al que se adicionará el IVA en caso de corresponder (cfr. Excma. C.S.J.N. en el fallo, “Compañía General de Combustibles S.A. s/ recurso de apelación “ sent. Del 16.06.03, Fallos 316,1533). Con relación a los honorarios correspondientes a la representación letrada de la demandada deberá estarse a lo dispuesto por el art. 2 de la Ley 27423.

Fecha de firma: 03/05/2023

Firmado por: WALTER FABIAN CARNOTA, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA CARMEN DORADO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI, SECRETARIA DE CAMARA



#37143324#357960729#20230419131616283



Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

EL DOCTOR WALTER F. CARNOTA DIJO:

Adhiero al voto del Doctor Juan Fantini Albarenque.

En atención a todo lo expuesto el Tribunal, por mayoría, **RESUELVE:** 1º) Habilitar la presente instancia, 2º) Revocar la resolución impugnada con el alcance indicado, 3º) Imponer las costas al organismo (art. 68 CPCCN), 4º) Regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora en 76 UMA, equivalente a \$ 1.134.908 (valor UMA \$ 14.933 conf. Acordada 09/2023), importe al que se adicionará el IVA en caso de corresponder (cfr. Excma. C.S.J.N. en el fallo, “Compañía General de Combustibles S.A. s/ recurso de apelación “ sent. del 16.06.03, Fallos 316:1533).Con relación a los honorarios correspondientes a la representación letrada de la demandada deberá estarse a lo dispuesto por el art. 2 de la Ley 27423. Regístrese, notifíquese, publíquese y, oportunamente, remítase.

JUAN FANTINI ALBARENQUE
Juez de Cámara

NORA CARMEN DORADO
Juez de Cámara

WALTER F. CARNOTA
Juez de Cámara Subrogante

Ante mí: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI
Secretaria de Cámara

ALP.

